



Murcia, después del saqueo

Javier Sánchez Serna

Introducción

En unos pocos años, la Región de Murcia ha pasado de ser la comunidad autónoma que más crecía de todo el país a ser una de las cinco comunidades que han destruido más empleo. Esta Región, que había conocido el milagro de la alquimia y transformado el ladrillo en oro, ha pasado a ocupar el furgón de cola de todos los indicadores sociales y económicos, convirtiéndose, según datos del INE, en la segunda comunidad que más se ha empobrecido con la crisis. Pareciera como si todo lo sólido se desvaneciera en el aire.

Esta tarde me gustaría que pensáramos esta aparente paradoja, y para ello me gustaría abordar una serie de cuestiones, por ejemplo: ¿sobre qué bases económicas se levantaron los años de crecimiento?, ¿en qué consistía el patrón de desarrollo regional?, ¿por qué despertó un consenso tan amplio entre la ciudadanía?, o ¿por qué el impacto de la crisis ha sido mayor en nuestra comunidad?

II. La urbanización del territorio como máquina de acumulación

En la Región de Murcia, como en el resto del país, el poder ha estado estos años en manos de una coalición de élites políticas, financieras y empresariales que tenían como proyecto relanzar y maximizar el beneficio a través de la urbanización y reordenación del territorio regional.

Este proyecto de clase fue la respuesta de las élites locales a un escenario económico complicado, un escenario marcado por la debilidad endémica de la industria regional y por



la creciente competencia internacional en el sector hortofrutícola. La urbanización del territorio apareció, por tanto, como la forma más efectiva de superar la incertidumbre económica, reorientando el sector inmobiliario con el fin de conectarlo a los flujos globales de capital.

El geógrafo inglés David Harvey ha señalado que la urbanización del territorio es una salida recurrente a las crisis de beneficio. Según Harvey el capitalismo, desde sus inicios, habría impulsado olas urbanizadoras para absorber el excedente de capital que genera continuamente. La ampliación de París que ejecutó el Barón Haussman, por ejemplo, fue un instrumento esencial en la absorción de capital excedentario y, más importante si cabe, en la estabilización social del país. Del mismo modo, la transformación de la ciudad de Nueva York que impulsó Robert Moses en los años treinta y cuarenta del siglo pasado, a través de la construcción de puentes, autopistas y otras obras públicas, resultó fundamental para reactivar la economía tras la grave crisis del 29. El capitalismo, según Harvey, necesitaría la producción de espacio urbanizado como inversión fija a largo plazo, pero también como lugar privilegiado para el intercambio de mercancías.

Ahora bien, ¿cuál sería la novedad, si es que hay alguna, de la ola urbanizadora que arranca a mediados de los 90 y rompe con la crisis de las hipotecas *subprime*? Siguiendo de nuevo a Harvey, podemos decir que la política urbana neoliberal se ha caracterizado por supeditar la ordenación del territorio a lógicas de competitividad, más propias del mundo de las finanzas. Así, frente al urbanismo de posguerra que buscaba cierta redistribución y homogeneidad en el territorio para apuntalar la industria local y el mercado interno, el proyecto de urbanización neoliberal fomentaría la competición entre territorios y la creación de ciudades-marca exitosas capaces de capturar los flujos de capital transnacional.

Si pensamos, por ejemplo, en las transformaciones experimentadas por Murcia ciudad vemos esto claramente. La reestructuración de la economía urbana muestra las



interacciones de la ciudad con las redes económicas globales: con la expansión de oficinas ligadas a los servicios de gestión de empresas; el crecimiento del sector financiero; la multiplicación de grandes superficies comerciales; el desarrollo de la industria del turismo y el espectáculo, etc.

En todo este esquema de ciudad, como es bien sabido, el protagonismo de promotores inmobiliarios y bancos ha resultado central. Esto no significa, sin embargo, que el Estado haya abandonado sus funciones en pos de la autorregulación del mercado. Antes al contrario, las distintas Administraciones (estatal, regional y locales) han orientado sus actuaciones a crear las condiciones de un determinado tipo de mercado inmobiliario, donde los propietarios del suelo, los agentes inmobiliarios y financieros pudieran operar a sus anchas.

El proceso urbanizador de la Región de Murcia, por bajar a lo concreto, no habría sido posible sin la Ley del Suelo del Gobierno de José María Aznar (1998), que declaraba que todo el suelo no especialmente protegido era susceptible de ser urbanizado, ni sin la Ley del Suelo regional (2001), que daba una vuelta de tuerca y descatalogaba el 20% de los espacios protegidos.

Lo primero que habría que entender, por tanto, es que el llamado “boom inmobiliario” de finales de los 90 no fue el resultado automático de un supuesto mercado inmobiliario liberalizado, sino más bien una apuesta política por un determinado modelo de desarrollo y de sociedad.

Algunos autores han denominado a este modelo como “neodesarrollista”, presentándolo como una actualización del desarrollismo franquista de los años 60, mientras que otros prefieren calificarlo como “monocultivo del ladrillo”, haciendo hincapié en su carácter dependiente de la construcción y el turismo residencial. En cualquier caso, no cabe duda de que a partir de la promulgación de las leyes estatal y regional del suelo, la “fiebre del ladrillo” alcanzó sus cotas más altas.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, entre 1995-2005 la superficie urbanizada aumentó en la Región de Murcia un 58% (la más alta del país). Se recalificaron espacios naturales protegidos, se multiplicaron las promociones urbanísticas y proliferaron los *resorts* con campos de golf. La llamada “huerta de Europa” se convirtió en un solar urbanizable y Murcia comenzó a promocionarse como el “geriátrico de Europa”.



Durante este periodo la Región de Murcia creció por encima de la media nacional y su modelo fue calificado desde diversos foros económicos como “éxito impresionante” y “milagro económico”. De forma paralela, se ahormó un gran consenso social y mediático en torno a dicho modelo. Un consenso que fue casi incontestable y que llevó al partido gobernante, el Partido Popular de la Región de Murcia, a conquistar las mayorías absolutas más abultadas de todo el país.

Pero, ¿cuáles fueron las bases materiales de este “milagro”?

III. Un crecimiento económico basado en el expolio del trabajo y la naturaleza

Más allá de las cifras macroeconómicas, podemos afirmar que el modelo desarrollista-especulativo regional ha presentado un carácter fuertemente depredador de las fuentes de la riqueza social, es decir, del trabajo y la naturaleza.

Ciertamente, el predominio de la agricultura intensiva, la construcción y los sectores asociados, implicó la utilización de una gran cantidad de trabajo barato y descualificado, a menudo en condiciones de precariedad. Según el informe *El otro estado de la Región*, elaborado por el Foro ciudadano, el salario regional era en 2004 un 14,27% inferior al del conjunto del país y en el año 2007 esa diferencia se elevó al 15,78%. Ese mismo año las tasas de temporalidad se situaban en el 41,1% en la Región frente al 32% de la media nacional.

El trabajo inmigrante fue otro elemento clave para la acumulación de la riqueza regional. Este subproletariado, barato y vulnerable, fue empleado en aquellos segmentos del mercado laboral caracterizados por unas condiciones

laborales altamente degradadas, tales como la agricultura, la construcción, la asistencia doméstica, la hostelería, etc. Se instauró lo que los sociólogos denominan una etnificación del mercado de trabajo, transformando ciertos trabajos (normalmente los más intensivos y peor valorados socialmente) en trabajo específico para inmigrantes. El sector hortofrutícola, por ejemplo, creció en buena medida sobre la sobreexplotación laboral de miles de inmigrantes, lo que ha permitido mantener el margen de ganancia de los cultivos intensivos.



Pero la expropiación del trabajo no sólo se llevó a cabo a través de los bajos salarios y de la sobreexplotación, sino también a través de las viviendas compradas con esos salarios. Y es que, con la denominada *liberalización* del suelo, la vivienda dejó de ser considerada como un derecho ciudadano (garantizado por el artículo 47 de nuestra Constitución) y se convirtió en una inversión especulativa, lo que resultó en un fuerte empobrecimiento y endeudamiento de las familias. Se calcula que durante la pasada década los ciudadanos tuvieron que destinar como media el 40% de sus ingresos familiares para comprar una vivienda libre.

La especialización de la economía regional en la producción de bienes de bajo valor añadido y trabajo descualificado, también tuvo efectos negativos sobre la instrucción y el nivel educativo de los murcianos.

Así, el incremento del PIB autonómico durante el ciclo expansivo, lejos de traducirse en una mejora de los índices educativos, vino acompañado por un notable retroceso de la eficacia del sistema educativo regional. La apuesta política por una Región de albañiles y camareras tiene mucho que ver con que la Región haya tenido una tasa de abandono escolar de 6 puntos por encima de la media nacional (37%), o de que presentara la tasa más baja de trabajadores activos con estudios superiores del país.

El ciclo de crecimiento económico tampoco sirvió para reducir las desigualdades ni para reducir la tasa de pobreza. Un vistazo a la distribución de la renta regional muestra a las claras quiénes fueron los ganadores y los perdedores del modelo neodesarrollista. El quintil superior de renta (el 20% de la población con mayores ingresos) aumentó su participación en la renta del

33,5% en 1999 al 38,4% en 2008. Paralelamente, el quintil inferior (el 20% más pobre) pasó de disfrutar el 10,3% de la renta a tan sólo el 4,1%. Como los más ricos son los que más defraudan y engañan al fisco, la realidad será incluso bastante peor.



En cualquier caso, la Región de Murcia, que en 1999 tenía un índice de desigualdad inferior a la media española, ocupa actualmente el primer puesto de la desigualdad.

El expolio de nuestros recursos naturales ha sido la otra pata sobre la que se apoyaba la máquina de crecimiento regional. La naturaleza fue considerada como "capital natural" que había que poner a producir y, consecuentemente, fue tratada como un activo a explotar especulativamente, trasladando todas las "externalidades" al estado y a la sociedad.

De los muchos parámetros medioambientales que podríamos señalar, me quedo con uno sintético que es quizá el más elocuente: la huella ecológica. La huella ecológica, como es sabido, es un indicador ambiental que permite medir el impacto sobre el ecosistema de una determinada formación social, relacionándolo con la capacidad de la Tierra para renovar sus recursos.

Pues bien, según los profesores Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, mientras que en el año 1995 la huella ecológica de la población regional era de 2,45 veces la superficie regional, en el año 2004, la huella ecológica se incrementó a 4,47 veces la extensión regional, situándose en la mitad superior del rango en el conjunto de las provincias españolas.

Estos datos muestran claramente el impacto que el modelo desarrollista tuvo sobre nuestros ecosistemas y la insostenibilidad de los patrones de crecimiento de los últimos años.

IV. Razones de una larga hegemonía conservadora

Dos décadas de gobiernos conservadores no sólo han transformado la estructura social y económica de la Región de Murcia, sino que modificaron profundamente el sentido común de sus gentes.

Margaret Thatcher solía decir aquello de que la economía es el método, pero la finalidad –de la política– es cambiar el alma de las personas. Y no cabe duda de que la quimera del ladrillo, la oferta sobreabundante de crédito y las promesas de enriquecimiento rápido, generaron una burbuja cultural entre la población murciana, cuyas consecuencias, a efectos de aceptar la cruda realidad de la crisis y dar una respuesta ciudadana, están siendo peores que la propia burbuja inmobiliaria.



En efecto, la Región de Murcia se ha consolidado como la región más conservadora del país. Desde 1995 el Partido Popular ha ganado todas las elecciones autonómicas con mayorías absolutas, la última de ellas, en 2011, con un nuevo record de votos y escaños (33 diputados de 45 y un 58,8% de los votos emitidos). ¿Cómo podemos explicar esta hegemonía de la derecha en la Región de Murcia y el gran consenso de masas que se levantó alrededor del nuevo proyecto neodesarrollista?

Yo señalaría, fundamentalmente, tres elementos: 1) la emergencia de nuevas clases medias ligadas al sector de la construcción; 2) la configuración de una identidad regional a partir de la demanda de un nuevo PHN; y 3) la implantación territorial de una amplia red clientelar entre el poder político, el poder económico y una parte de la ciudadanía.

4.1. Las nuevas clases medias

En este punto resulta muy interesante recoger la aportación del sociólogo Armando Fernández-Steinko, que ha estudiado muy bien el papel de los nuevos autónomos y los pequeños empresarios de la construcción en la extensión ideológica de este modelo de sociedad entre las clases medias y populares. Este grupo social, en buena parte proveniente de la clase trabajadora, habría tenido un protagonismo político e ideológico muy especial en la conformación hegemónica de los valores de lo que Steinko llama un “capitalismo popular inmobiliario”.

En su paso de asalariados a empresarios, dicho grupo habría modificado su status social y su trayectoria ideológica, derechizándola y extendiéndola a

otros ámbitos de la sociedad debido al fuerte dinamismo del sector de la construcción que le dio soporte y reconocimiento a dicha trayectoria. Steinko ha mostrado su peso cuantitativamente superior en Murcia respecto a la media española (los autónomos aumentaron un 28% en el periodo 1999-2008, frente a un 13% de media nacional, y las sociedades limitadas un 120% frente a un 105%), y ha evidenciado la correlación entre el ascenso de este grupo social y el aumento de voto al PP.



No obstante, el fuerte impacto de la crisis en este grupo social, debido al fuerte apalancamiento en créditos que no pueden devolver, apunta a un importante desclasamiento de este estrato, que tendrá efectos en la base social que ha apoyado este proyecto y en las lealtades políticas tradicionales.

4.2. El nacionalismo hidráulico

El agua, o más en concreto el problema de la escasez agua, ha sido otro de los principales temas de la disputa política regional y una de las demandas fundamentales de las que el Partido Popular hizo bandera y pueblo.

Mientras que en 1990 el llamado “problema del agua” era la mayor preocupación sólo para el 0,4% de los ciudadanos, en 2005 el 60,4% lo señalaba como uno de los “principales problemas para el desarrollo de la Región”.

Ciertamente, la aparición de novísimas macroubanizaciones (con sus respectivos campos de golf), junto con el crecimiento vertiginoso e insostenible de los nuevos regadíos y la multiplicación de los pozos ilegales, aumentaron exponencialmente la demanda de agua. Se generó el llamado “déficit hídrico” estructural, que fue utilizado para demandar la construcción de un nuevo trasvase desde el Ebro. En torno a esta demanda, el Partido Popular, junto a una parte importante de la sociedad civil (el papel de los medios de comunicación fue aquí crucial), fue generando una identidad regional murciana, que algunos analistas han calificado como de “nacionalismo hidráulico”.

La idea era relativamente sencilla, a saber: el atraso secular de la Región de Murcia se había debido en gran parte a una “pertinaz sequía” que había lastrado sus posibilidades de desarrollo. Con el desarrollo urbanístico y la

agricultura intensiva, la Región encontraba por fin una vía de modernización y ésta no podía malograrse por falta de recursos hídricos. Eran necesarios, por tanto, aportes hídricos externos que complementaran los del trasvase del Tajo.



En torno a esta demanda, el Partido Popular, como si de un atento lector de Laclau se tratara, articuló un pueblo murciano en oposición a los que criticaban o se oponían al trasvase del Ebro. La oposición, los ecologistas, los aragoneses o el Gobierno de Zapatero, eran el enemigo, el “afuera” del sistema, que impedía a Murcia su desarrollo y prosperidad.

Naturalmente, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria el relato del “agua para todos” ha perdido fuelle. Principalmente, por dos razones; porque ya nadie identifica los problemas económicos regionales con la falta de aportes hídricos y porque el Gobierno de Rajoy –así de dura es la vida– ha decidido dar carpetazo a cualquier tipo de trasvase desde el Ebro.

Paradójicamente, y dicho sea como apunte, parece que el “agua para todos” está volviendo a instalarse en la conciencia de los murcianos pero, esta vez, de la mano de las familias y asociaciones que están denunciando a EMUASA por los cortes de agua a población vulnerable y por el encarecimiento injustificado del servicio.

4.3. Corrupción y redes clientelares

Murcia es la comunidad autónoma con más ayuntamientos implicados en casos de corrupción (según un estudio de la Universidad de La Laguna para el período 2000-2010 los casos de corrupción alcanzaron al 57,8% de los municipios de la región, siete veces el porcentaje medio nacional).

Las redes clientelares, las “puertas giratorias” y el “amiguismo” han sido, lamentablemente, otro de los elementos centrales que explican la hegemonía y capilaridad social del bloque de poder que ha dirigido la Región de Murcia estos años.

Esta plaga de corrupción hunde sus raíces en la persistencia del caciquismo oligárquico, heredado de la estructura social franquista, así como en la falta de modernización económica e institucional.



El historiador Rodríguez Llopis escribía en su *Historia de la Región de Murcia* (1998), refiriéndose al ciclo desarrollista de los años 60, que en la región “surgieron y crecieron numerosos patrimonios al amparo de la actividad política de sus creadores, que manejaban información privilegiada a través de la ostentación de alcaldías y cargos provinciales; la creación de inmobiliarias con políticos como socios fue uno de los mejores ejemplos de todo ello”.

Creo que podríamos suscribir este párrafo como descripción certera de la corrupción estructural que ha presidido la región de Murcia estos años de *boom inmobiliario*. Porque la corrupción no ha sido algo aislado, como siempre se dice, sino que ha constituido el lubricante irremplazable del modelo económico.

Así, si en el franquismo la promoción de los intereses de las élites se lograba a través del autoritarismo, durante estos años se ha logrado a través de redes clientelares que articulaban una íntima conexión entre políticos, constructores y financieros. Es lo que el economista José Manuel Naredo ha denominado “neocaciquismo democrático”, subrayando que, lejos del presunto liberalismo, dicho modelo requiere una fuerte intervención pública, a través de la legislación urbanística y la transferencia permanente de dinero público a manos privadas.

En muchos casos estas nuevas redes clientelares, interpenetradas de intereses financieros, empresariales y políticos llegaban a situaciones de “secuestro” de parte de los ámbitos institucionales de decisión (podemos poner muchos ejemplos en el urbanismo de municipios como Murcia capital, Águilas, Librilla, San Javier, Totana, Lorca, Alhama, Torre Pacheco y un largo etcétera) que ha dejado una densa estela de corrupción y económica que sólo ahora empieza a juzgarse.

Esta corrupción estructural tiene su correlato, retroalimentado como causa y efecto, en la apatía y la sumisión de amplios sectores sociales, sin los cuales este escenario no hubiera sido posible.



No obstante, la caída de la construcción y el estrangulamiento financiero de las corporaciones locales, pone en cuestión la permanencia de este neocaciquismo y, de nuevo, amenaza con disolver las lealtades políticas tejidas durante el ciclo de crecimiento.

A estos tres pilares de la hegemonía conservadora regional, quizá debamos sumar el uso político de la religiosidad popular y el relevante papel que la Iglesia católica, y algunos de sus sectores más integristas, juegan en la sociedad civil murciana. Sólo desde estos parámetros, se puede concebir como algo ya habitual que el Presidente de nuestra Comunidad, el señor Alberto Garre, diga en la prensa que habla con la Virgen de la Fuensanta “cuando necesitamos agua”.

V. Crisis, Deuda y fractura social

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, a raíz del crack financiero de 2008, el modelo especulativo-desarrollista regional se vino abajo, sumiendo a la Región de Murcia en la peor crisis de su historia reciente. De la noche a la mañana, como quien dice, miles de empresas quedaban arruinadas, el sistema de crédito regional quebraba, las haciendas públicas de la región se hundían, mientras que 100.000 trabajadores perdían sus empleos.

El impacto de la crisis económica sobre nuestra Región ha sido, y está siendo, más grave que en otras comunidades y ello se debe, en buena medida, a las decisiones que las élites políticas, financieras y empresariales han tomado estos años. Ya hemos señalado algunas: la escasa diversificación del tejido productivo regional, la apuesta especulativa por la construcción y el tipo de empleo asociado a ella, el abandono de la educación y el I+D, el consumo irresponsable de recursos naturales no renovables, etc.

Pero si hablamos de los fracasos del Gobierno regional, tampoco podemos olvidar el fiasco de las grandes infraestructuras y la socialización de deudas privadas que han implicado.



La lista de proyectos malogrados es larga y conocida: el aeropuerto sin aviones de Corvera, del que la Comunidad Autónoma se tuvo que hacer cargo mediante un crédito de 182 millones de euros; la Autovía Cartagena-Vera, que tuvo que ser rescatada por el Estado; el proyecto fallido de televisión autonómica (7RM), en el que se despilfarraron 250 millones; la desaladora de Escombreras, que ha acabado multiplicando su coste inicial por cuatro, hasta los 550 millones; o todos los gastos técnicos para proyectos paralizados o sin desarrollo como Marina de Cope, el Gorguel, Contempolis, etc.

Estos extraños liberales, tan preocupados en teoría por el gasto y la ineficacia de lo público, no han tenido ningún reparo en dilapidar enormes cantidades de dinero público en infraestructuras de todo punto innecesarias, ni han considerado “ineficientes” los sobrecostes de obra que demandaban las constructoras, como tampoco han dudado en salir a su rescate cuando la inversión se revelaba ruinosa.

Pues bien, como consecuencia de todo lo anterior, la Comunidad Autónoma de Murcia es hoy una comunidad quebrada e intervenida por el Estado. La deuda regional aumentó entre 2007 y 2013 un 725%, y ya supera en su montante al presupuesto regional. De este modo, la deuda regional ha pasado de suponer un 2,4% de nuestro Producto Interior Bruto, en 2007, a un 17,4% en 2013.

La otra cara de la deuda, como sabemos bien, son los recortes en los servicios públicos y los derechos ciudadanos. En efecto, la socialización de las deudas privadas de bancos y constructoras se ha traducido en la pérdida de calidad y universalidad de los servicios públicos básicos, que son los que en último término garantizan nuestra cohesión como sociedad y nuestra independencia como ciudadanos. Estos recortes, ejecutados en el momento en que más se necesitaba una amplia red de protección pública, están infligiendo un inmenso daño a la gente y dibujando un escenario de emergencia social.

Alguien podría pensar que estoy exagerando, por eso me gustaría aportar algunos datos que nos ayuden a entender las dimensiones de la otra crisis regional: la crisis social.



- Según datos de la EPA del segundo cuatrimestre de 2014, la tasa de desempleo regional se sitúa en el 27,71% (frente al 25,1% de la media español).
- La renta familiar murciana, según datos del INE, es la segunda que más ha retrocedido con la crisis, perdiendo entre 2008 y 2013 una media de 2.885 euros (-12%), que supone en realidad un 22% de caída si le añadimos el aumento de los precios en el periodo.
- Los indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida, del INE, señalan que la Región de Murcia está a la cabeza del porcentaje de familias que llegan a final de mes “con mucha dificultad”, con un 24,8% (frente al 16,9% del promedio nacional).
- El 35,9 de la población regional está en riesgo de pobreza (frente al 28,2% de la media nacional), según el indicador europeo AROPE.

La situación, como decíamos, es de extrema necesidad para mucha gente. Según la Alianza Española contra la Pobreza, harían falta unos 100 millones de euros para que todos los murcianos en situación de exclusión tuvieran una renta básica que les permitiera subsistir dignamente.

Pero, ya saben, no hay dinero. Hay dinero para rescatar a los bancos, a las grandes constructoras y a sus obras ruinosas, pero no hay dinero para rescatar a la gente normal y corriente. Por eso decían los clásicos que la economía es siempre economía política, porque el que manda siempre decide para quién funciona la “economía”.

VI. A modo de conclusión

El llamado “milagro económico” murciano se ha revelado, a la luz de la crisis, como un auténtico “saqueo” de nuestra riqueza social y natural. Los años de crecimiento no sólo no sirvieron para fortalecer nuestro sistema de bienestar y

converger con el resto de regiones españolas, sino que aumentaron las desigualdades internas y la distancia con el resto del país, poniendo las condiciones, para que una vez agotado el cultivo del ladrillo, la sociedad murciana se deslizara por la pendiente del paro, la pobreza y la incertidumbre.



El brusco final del proyecto neodesarrollista ha dejado a las élites locales paralizadas y sin recambio a la vista. La obstinación del Gobierno Regional con futuribles macroproyectos, como el parque Paramount, es un síntoma claro de que no se vislumbra un cambio de modelo y de que todo se fía a una improbable reedición de la burbuja inmobiliaria.

El bloque de poder está, ciertamente, en apuros y por eso vamos asistir a toda una serie de movimientos que permitan operar un cierre político y garantizar su continuidad. Lo vemos en la obstrucción y dilatación de numerosos procesos judiciales que afectan directamente a importantes dirigentes del PP; lo vemos con la reforma de la elección directa de alcaldes, vital para conservar el mayor número de redes clientelares locales; y lo vemos también con la propuesta de modificación de la ley electoral regional, una propuesta de ley que aumentaría el número de circunscripciones con el objeto de reducir la proporcionalidad y asegurar una nueva mayoría absoluta.

El pueblo murciano, mientras tanto, despierta lentamente del sueño del ladrillo y comienza a entender que el mundo del ayer no volverá. Sin embargo, las inercias pesan todavía demasiado y el sistema "neocaciquil", aunque a medio gas, sigue funcionando. Mucha gente vive aún de los restos de la economía especulativa y, sencillamente, identifican la supervivencia del régimen de poder con la suya propia. En cualquier caso, la desafección social hacia las instituciones regionales crece día a día, y la ventana de oportunidad está abierta. Una reflexión para finalizar. Es importante que sigamos contándonos qué ha pasado estos años, que nos recordemos las promesas que nos hicieron y las comparemos con la cruda realidad. Es importante que les pongamos nombres y apellidos a los responsables políticos y económicos del saqueo. Es importante, al fin y al cabo, que no olvidemos.

Sólo seremos una sociedad madura cuando no miremos hacia otro lado, cuando pidamos que se juzguen con la mayor celeridad posible los casos de corrupción, o cuando reclamemos una auditoría pública de la deuda de nuestros ayuntamientos y comunidad; para conocer, por ejemplo, en qué se han gastado nuestro dinero y cómo se han gestionado los grandes contratos y los “generosos” rescates. Sólo entonces podremos pasar página a estos años de crisis y expolio, y recuperar la Región de Murcia para su gente.

